

HACIA DÓNDE PUEDE IR EL SECTOR AGROPECUARIO
Conferencia del Ministro de Economía, Planificación y
Desarrollo, Isidoro Santana, en el desayuno de la
Confederación Nacional de Productores Agropecuarios
Santo Domingo, 9 de julio del 2019

Si hay algo que está claro en la evolución de la economía dominicana durante la época moderna es la pérdida de espacio relativo que ha experimentado el sector agropecuario en el aparato productivo nacional. De aportar casi la tercera parte del PIB en 1960, en 2018 ese aporte se había reducido a 5.1%.

Esta evolución se explica por una serie de condicionantes internacionales, como veremos más adelante, y políticas erradas en el orden nacional, particularmente por el modelo de crecimiento capitalista impulsado por el Dr. Balaguer, inicialmente muy apoyado por EUA, cuando se normalizó la vida nacional, tras la agitada primera mitad de los años 60.

Como sabemos, sea por la experiencia o por el conocimiento de la historia, hasta la caída de la tiranía, las principales actividades económicas eran acaparadas por el sátrapa y sus allegados. Las industrias más importantes,

gran parte de la industria azucarera, la minería, la inmobiliaria, los negocios de importación más rentables, etc., eran todo manejados por el dictador y sus allegados. También acaparó importantes explotaciones agropecuarias, pero no podía apoderarse de todo el fondo territorial, por lo que era en la actividad agropecuaria que quedaba espacio para la exigua clase acomodada no vinculada con el régimen.

Tan pronto cayó la dictadura, se comenzaron a introducir medidas orientadas a dirigir las inversiones hacia actividades urbanas, más modernas. Inicialmente, algunas de estas políticas no tuvieron éxito, pues las condiciones de inestabilidad social y política no definían un entorno favorable para las iniciativas empresariales. Fue el caso de la ley 4 de 1963, de Protección e Incentivo Industrial, la cual, con incentivos similares a los que luego establecería la ley 299, no tuvo efectos significativos.

Pero con la estabilidad política instalada a partir de 1968, las múltiples leyes promulgadas para promover actividades modernizadoras comenzaron su auge: banca de desarrollo, banca hipotecaria, desarrollo industrial basado en sustitución de importaciones, zonas francas, turismo, etc., prácticamente todas las actividades no agropecuarias se beneficiaron de algún mecanismo de incentivo.

Todo lo contrario ocurrió con el tratamiento que se le dio al sector agropecuario. El impulso a la naciente

industrialización requería, en la concepción política prevaleciente, mantener deprimido el costo de la mano de obra, lo que, a su vez, implicaba bajos precios para los alimentos básicos consumidos por la ciudad. Esto llevó a la Dirección General de Control de Precios y la instalación del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), cuya principal función era mantener deprimidos los precios de los productos agrícolas básicos.

Incluso las políticas desarrollistas que el Dr. Balaguer introdujo en el campo, como todo el paquete de leyes agrarias, más a que a dinamizar el campo, en realidad se dirigían a desplazar a la burguesía agraria hacia actividades más modernizantes y asegurar una adecuada provisión de bienes-salario. De ahí la atención que se le prestó a la producción de arroz y pollo, rubros en los que se centraron los escasos recursos destinados a la agropecuaria.

Más aun, el mundo rural fue visualizado como fuente de recursos para apuntalar el impulso a los nuevos sectores dinámicos. Mientras que estos eran favorecidos con generosas exenciones impositivas, los rubros agropecuarios que habían conformado la columna vertebral de la economía nacional fueron objeto de una política aún más destructiva: cuando los precios eran altos en los mercados internacionales, se les gravaba con onerosos impuestos, a las ganancias supuestamente extraordinarias, mientras que

cuando los precios se desplomaban, el productor era el que tenía que cargar con las pérdidas extraordinarias.

Estas políticas, incluyendo el tributo disfrazado de recargo cambiario que sobrevino a la devaluación de los años ochenta o la revaluación cambiaria posterior, fueron determinantes para la decadencia de la producción cafetalera, impactando también negativamente la de tabaco, cacao y la industria azucarera. Lógicamente, esto llevó a la desinversión y la progresiva minimización de esos cultivos.

La escasa rentabilidad que esas políticas le permitieron a la producción campesina está, sin duda, en la raíz del éxodo rural-urbano que experimentó el país, y la pérdida de importancia relativa en el PIB que señalé al inicio.

Los intentos de redinamización del campo inicialmente llevados a cabo durante el gobierno de Antonio Guzmán, pronto limitados por las tensiones creadas por la experimentación del modelo de demanda inducida, no alcanzaron a modificar las condiciones de operación del campo, y el nuevo largo período de administración balaguerista la mantuvo fundamentalmente sin modificación hasta su salida del poder en 1996.

Algunas de las nefastas políticas que afectaban al mundo rural fueron removidas con los programas de reforma de inicios de la década de los 90, como los controles de precios y los impuestos sobre las exportaciones tradicionales, pero

faltaron políticas activas para contrarrestar tantos años de opresión.

La desventaja relativa en que quedó sumido el ámbito rural nacional en 1996, cuando el Dr. Balaguer, por fin, salió del poder, se puede percibir en los indicadores de pobreza: para ese año, el 79% de la población rural se encontraba en condiciones de pobreza multidimensional, contrastado con el 40% en la población urbana.

Solo con el crecimiento económico experimentado y el apoyo estatal al campo de la actual gestión, se ha logrado una acelerada reducción de esa situación, y para el 2018 la incidencia de la pobreza multidimensional fue de 23.8% de la población rural y 22.8% en la zona urbana, habiéndose reducido la brecha entre ambas.

Inciden, además, cambios en el entorno internacional que limitan la capacidad de rejuego de las políticas nacionales. Y aquí permítanme un poco de historia, puesto que el contexto internacional, tanto como las políticas internas, ha sido determinante para la evolución de la agropecuaria dominicana.

Recordemos que para las décadas intermedias del pasado siglo XX, la República Dominicana, al igual que el resto de América Latina, había estructurado su economía en base al modelo primario-exportador. A nuestro país le había tocado, en esa división internacional del trabajo que la historia había impuesto, el suministro al mercado mundial

de azúcar, café, cacao y tabaco, junto a algunos productos minerales.

Las conversaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial que tuvieron lugar en Bretton Woods propusieron una nueva organización de la economía mundial, en la cual la tendencia debía ser hacia una mayor liberalización del comercio. Sin embargo, en la práctica, la liberalización era solo parcial y a conveniencia: se liberalizaban los sectores en que se fuera más competitivos.

Evidentemente, los países desarrollados eran más competitivos en la producción industrial, mientras que América Latina era más competitiva en bienes de la agropecuaria. De ahí que en el lenguaje económico y político se comenzaran a conocer los países ricos como industrializados, en tanto que nosotros éramos países agrícolas y pobres.

En la medida en que las cosechas y los precios de estos productos, además de los factores agro-climatológicos, estaban a expensas de las veleidades de los ciclos económicos, esto no dejaba muy bien parados a nuestros países, pues los ingresos fiscales que permitían al Estado proveer servicios e infraestructura, las divisas para financiar la balanza de pagos, y el empleo e ingresos de los hogares quedaban expuestos a los vaivenes de los precios internacionales de nuestras exportaciones.

Sumado a ello, la teoría del deterioro tendencial de la relación de intercambio se puso en boga, al constatarse que a largo plazo los precios relativos de los bienes primarios tienden a reducirse respecto a los de los bienes industriales y los servicios. Quedaba claro que el modelo primario-exportador no conduciría al desarrollo.

Eso fue provocando una nueva orientación de las políticas públicas, tendente a que nuestros países buscaran también convertirse en industrializados. El instrumento usado para ello fue la protección arancelaria e incentivos fiscales, de infraestructura, crediticios, cambiarios, de controles de precios, etc., prácticamente lo mismo que se hizo en R.D. a partir de 1968. Pero esas mismas medidas influían negativamente en el sector agropecuario.

La reacción de los países desarrollados no sería muy diferente. De mantenerse la tendencia, sus productores agrícolas estarían condenados a vivir condiciones de desventajas de rentabilidad e ingresos respecto a sus pares de la industria, lo que generaría un fuerte desequilibrio sectorial, social y geográfico y, a la postre, la desaparición gradual de su agricultura y crear una situación de dependencia agroalimentaria, lo que les resultaba inaceptable.

La única diferencia es que ellos sí tenían dinero suficiente para, en vez de establecer altos aranceles, otorgar subsidios a la agricultura, a veces combinados con aranceles-cuota,

como pasaba con la industria azucarera, o con una enorme carrera de obstáculos a la entrada de alimentos, como restricciones cuantitativas, obstáculos aduanales o técnicos, etc.

De manera que se creó un sistema en el cual todo el mundo protegía lo que otros podían producir mejor: los del Tercer Mundo protegían su industria y los ricos su agricultura.

Nosotros con aranceles y ellos con subsidios. Las sucesivas rondas de negociaciones del GATT no avanzaron mucho en resolver esto y la última de todas, la Ronda Uruguay, tomó casi una década sin resolver el diferendo y terminó en 1995 con la creación de la OMC. La conclusión fue una notoria derrota para América Latina, al no conseguir grandes avances para que se desmontara el sistema de subsidios agrícolas de EUA, la Unión Europea, Japón, Australia, etc.

Esos subsidios a la producción agrícola de los países desarrollados, junto a las políticas internas ya indicadas que privilegiaban la ciudad frente al campo, fueron responsables de que la República Dominicana se fuera convirtiendo gradualmente en importador de muchos alimentos en los cuales solíamos ser autosuficientes, entre ellos algunos cereales, como el maíz, lácteos, oleaginosas y productos cárnicos, así como la degeneración de la industria azucarera. Consecuentemente agudizaron el empobrecimiento relativo del campo y el abandono de múltiples actividades agrícolas.

La tapa al pomo se la puso el DR-CAFTA, a mi juicio, una negociación muy pobre, particularmente para nuestra agropecuaria, pues el país se comprometió a ir liberalizando su comercio para los productos estadounidenses, pero ellos seguirían protegiendo su agricultura. Nosotros iríamos suprimiendo nuestros aranceles, pero ellos en ningún momento se comprometieron a eliminar los subsidios. Libre comercio solo para unos.

Para muestra del generoso uso de subsidios en los países desarrollados, un botón: Cuando Trump se embarcó en su guerra comercial con China y se temió que las represalias de este país afectasen a los productores norteamericanos, publicó la prensa que el *Gobierno de Estados Unidos lanzó un plan valorado en 12,000 millones de dólares para compensar a los agricultores estadounidenses perjudicados por los aranceles de otros países en represalia a los aprobados por el presidente Donald Trump*. Evidentemente, el Estado Dominicano no tiene capacidad para adoptar medidas similares en apoyo del sector agropecuario, ni de ningún otro.

Afortunadamente, pese a todas las trabas señaladas, el país ha alcanzado una situación de autosuficiencia alimentaria. Sobre la base de los principales productos agropecuarios, la producción nacional satisface, en promedio, más del 100% del consumo nacional aparente para 2018. Si bien algunos renglones de consumo local se importan, otros se exportan. Ahora bien, en una economía tan abierta como es la

dominicana, la autosuficiencia alimentaria no basta. Se necesita que el sector agropecuario contribuya con sus exportaciones al dinamismo y la transformación de la economía, por lo que es necesario examinar el potencial que presenta ese sector para diseñar las consecuentes políticas de apoyo.

Creo que el examen de la evolución de los productos tradicionales y sus derivados, que permite visualizar las oportunidades aprovechadas o perdidas, puede servir de ejemplo para concebir cuáles pueden ser las vías para impulsar tendencias dinamizadoras en el agro.

Es necesario aclarar que con las reflexiones sobre los productos tradicionales de exportación no pretendo, en ningún caso, reivindicar que ellos debieron seguir constituyendo la columna vertebral de la economía, sino que presentaban potencialidades que en unos casos se desaprovecharon y en otros se utilizaron exitosamente, aun sea de manera parcial.

De los cultivos tradicionales, el café y el azúcar nunca se recuperaron, excepto que algunos productores privados siguen siendo empresas rentables, mientras las tierras estatales anteriormente cañeras se han convertido en una fuente de despojo del patrimonio público.

En el caso del café, su situación se agravó con las plagas y enfermedades, no combatidas oportunamente. Esperemos que los esfuerzos que se están realizando por conseguir

introducir mejoras de variedades y obtener denominaciones de origen para cafés de excelente calidad, logren posicionar sólidamente el café dominicano en los mercados internacionales de productos *Premium*.

Otra historia ocurrió con el tabaco y el cacao, que lograron resurgir por medio de procesos que les permitieron cierto escalamiento en la cadena de valor, aunque recurriendo al artificio de acogerse al régimen de zonas francas.

Los guineos han constituido también un caso de éxito, pero relativo, porque su crecimiento se ha basado en preferencias arancelarias. No obstante, el impulso a la producción orgánica ha constituido un punto fuerte para el crecimiento logrado.

Según las informaciones del Banco Central, durante toda la presente década, han superado, con mucho, las exportaciones de azúcar y de cacao, alcanzado un máximo de US\$331 millones en 2014.

En los tres casos exitosos registrados en las exportaciones agropecuarias se observa la presencia de un elemento común: el escalamiento en la cadena valor. En el tabaco se produjo la integración del proceso productivo desde la materia prima al producto final.

En el cacao, además de la condición de orgánico, hubo un proceso de mejoramiento de calidad, reconocido ahora frecuentemente como el mejor del mundo. En el caso del

guineo, sigue pendiente incrementar su capacidad de competir con aquellos productores que hasta ahora han estado fuera de la competencia por las preferencias arancelarias que ha gozado el país en Europa.

Creo que estas experiencias marcan posibles líneas de acción para conseguir la dinamización del campo dominicano. Calidad y diferenciación de los productos parecen estar en la base del éxito. Pero, ciertamente, para conseguir esas cualidades es mucho lo que hay que trabajar.

Quizás el mayor inconveniente que enfrenta el sector agropecuario es el pequeño tamaño de la mayor parte de las explotaciones, aunado a la incidencia del factor riesgo. Estos dos elementos limitan poderosamente la capacidad de capitalización que demandaría la incorporación del progreso tecnológico a las prácticas culturales tradicionales.

Y en cuanto al financiamiento, el propio Ministerio de Agricultura lo señalaba, en el *Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo 2010-2020*, como una de las principales deficiencias del sector.

La dificultad de conseguir crédito indudablemente se vincula al riesgo implícito en la actividad y a la escasa capitalización de las unidades productivas. Es por ello por lo que la banca privada muestra escasa propensión a financiar las actividades agropecuarias, propensión que incluso luce decreciente.

El esfuerzo por dirigir recursos a los pequeños productores queda, en consecuencia, dependiente de las finanzas públicas. Y ese ha sido uno de los núcleos del apoyo que la presente administración gubernamental ha dirigido al sector agropecuario. Al finalizar 2018, la cartera de préstamos del Banco Agrícola se elevaba a RD\$27,900 millones, cuando en 2012 no alcanzaba los 7,000 millones de pesos.

Ahora bien, los recursos del BA, además de insuficientes, se concentran en unos pocos productos: el arroz, el cacao y la ganadería. Esto implica que no quedan muchos recursos para la masa de productores de una amplia variedad de rubros.

Es de destacar, sin embargo, el incremento que han experimentado los préstamos del B.A. dirigidos a las microempresas agroindustriales rurales, los cuales aumentaron de RD\$1,681 millones en 2016 a RD\$5,183 millones en 2018; esto es, se multiplicaron por más de tres veces en tan solo dos años.

En el tema del financiamiento resulta necesario insistir en la importancia del programa de titulación de tierras que viene desarrollando la actual administración, puesto que aporta un activo, y por lo tanto una garantía, hasta ahora inexistente.

Esas dos principales debilidades son las que se ha buscado atacar en las visitas sorpresa del presidente de la República,

centradas en facilitar financiamiento a las iniciativas colaborativas. Creo que, si se logra difundir y consolidar una cultura de cooperativismo o alguna otra forma de asociatividad en el campo, ese pudiera convertirse en el aporte trascendental de esa iniciativa presidencial.

Dado el pequeño tamaño de las unidades agropecuarias, su potencial individual para allegar los recursos requeridos para el progreso técnico y empresarial resulta muy reducido, desventaja que puede ser superada por una buena organización cooperativa que sume recursos y capacidad. Desde luego, este es un cambio cultural que requiere de un apoyo sólido y sistemático.

Por el lado del financiamiento, el FEDA es la institución que ha estado focalizándose en apoyar esas iniciativas. El Gobierno ha invertido unos 6,000 millones de pesos para auxiliar a los productores agrícolas a través del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA), en cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente Danilo Medina en sus Visitas Sorpresa.

Otros muchos apoyos son necesarios para lograr un desarrollo agropecuario pujante. La modernización de las prácticas de cultivo va a ser una tarea ardua. Según el documento de *Estrategia* ya mencionado, el Ministerio de Agricultura señala que el “Servicio de Adopción y Transferencia Tecnológica no ha logrado impactar en la cultura rígida de la mayoría de los productores del país,

situación que coloca al sector agropecuario en una posición de desventaja competitiva.

Insiste el Ministerio que, de hecho, coexisten dos subsectores diferentes: uno moderno o en vías de modernización, con estructura empresarial y orientación a los mercados, cuya tecnología es relativamente avanzada, y otro de pequeña escala y limitada capacidad empresarial, que tiende a concentrarse en ambientes frágiles y suelos de baja fertilidad....

La falta de una asignación presupuestaria en función de las necesidades de incentivar la investigación, agravada por la ejecución de programas de capacitación deficientes, de bajo contenido científico-técnico; y de actualización científico-técnica no adecuada al nivel que exigen las circunstancias; así como el elevado costo de la tecnología, son factores que gravitan en las deficiencias de este servicio.”

En esa explicación de las deficiencias aparecen tres componentes: primero, un problema cultural, de resistencia del pequeño campesino a variar sus prácticas tradicionales; segundo, deficiencias en la asistencia técnica que el Ministerio les brinda; y tercero, el elevado costo de incorporar tecnologías más modernas.

Enfrentar cualquiera de ellos demanda recursos que a veces superan la limitada capacidad fiscal, pero hay que afrontarlos. La deficiencia en la asistencia técnica debiera

ser relativamente el más fácil de resolver, pues se trata de diseñar los programas de capacitación adecuados y de controlar la eficiencia en el traspaso de los conocimientos a la población.

Se deben revisar los mecanismos mediante los cuales se trata de difundir las nuevas tecnologías y de constatar su eficacia. Es decir, todo programa debe ser sometido a monitoreo y medición de resultados, pues de otra manera no es posible introducir los correctivos que puedan ser necesarios. Claro está, también demanda recursos adicionales para contratar profesionales en la cantidad y calidad requeridos.

Respecto a la rigidez cultural del campesinado, creo que se debiera explotar el efecto demostración de las buenas prácticas. Y los grupos favorecidos por las visitas sorpresa pudieran convertirse en un poderoso instrumento a tal fin. A esos grupos se les condiciona el apoyo a que se coordinen, a que se conviertan en asociaciones de colaboración.

Si el apoyo crediticio, que suele constituir el núcleo de la ayuda que se les brinda, se acompaña y condiciona con la incorporación de tecnologías más avanzadas, que abarquen desde las prácticas culturales hasta aspectos administrativos y de mercadeo, los resultados deben ser exitosos y utilizados como escaparate para mostrar las ventajas de la cooperación y la modernización.

Esto debiera incentivar a otros conglomerados a replicar la experiencia y pudiera constituir un pilar en la modernización de la producción de las pequeñas unidades. Y, por último, respecto a estas tres dificultades para la modernización, el alto costo de la incorporación de tecnologías más modernas siempre podrá ser más fácilmente absorbido entre varios que individualmente.

Creo que hay otra ventaja fundamental que se puede obtener de la asociación colaborativa de productores: las modalidades de comercialización de la producción. Evidentemente, no es lo mismo el poder de negociación de un conuquero que el de una asociación de productores. Y más fuerte aún sería la capacidad negociadora de una asociación de asociaciones.

Siempre se ha argumentado la importante porción del valor de los productos que se apropia la cadena de intermediación. La organización asociativa pudiera acortar significativamente los eslabones de esa cadena.

La verdad es que son muchos los problemas a enfrentar en el sector agropecuario. Las condiciones fitosanitarias de los productos constituyen uno de los más grandes, ocasionando la gran cantidad de rechazos y la devolución de contenedores de productos dominicanos en los puertos extranjeros, que suele ocasionar grandes pérdidas a los agricultores y exportadores.

Otra deficiencia señalada por la *Estrategia* consiste en la no aplicación de la zonificación de cultivos, con tal de contrarrestar el conuquismo en laderas de áreas con vocación forestal, la funesta práctica de quema y desmonte; el desarrollo de proyectos urbanísticos en superficies otrora agrícolas; el deterioro de la reserva ambiental, o el mantenimiento de importantes parcelas de tierra que alguna vez fueron productivas a la espera de que se presenten las condiciones para el desarrollo de un proyecto habitacional.

Con una clara definición de qué tierras son de vocación agrícola y cuáles de vocación urbanística, se podría generar un incentivo para retornar a su explotación productiva.

Hay que seguir insistiendo que, en virtud de la negativa de los países desarrollados en permitir la libre competencia en los renglones en que ellos pueden producir favorablemente, nos queda procurar ciertos nichos en los que ellos no pueden.

Las hortalizas en ambientes controlados, principalmente para los meses más fríos, y las frutas tropicales, parecen ser las de mayor potencial. En eso el país ha venido alcanzando determinados éxitos, como las exportaciones de pimientos, que ya sobrepasan los US\$10 millones, o los mangos y los aguacates.

Como antes señalé, recuperar el potencial exportador del campo dominicano debiera ser un objetivo prioritario: No se trata de volver a depender de bienes *commodities*, sino de aprovechar todas nuestras potencialidades en el nuevo entorno internacional, que establece fuertes condicionalidades, pero que también brinda grandes oportunidades, como se han plasmado en el caso de nuestros dos rubros de exportación orgánicos.

No se trata solo de la generación y transmisión de tecnología para producir, sino también de invertir en infraestructura de almacenamiento, transporte y comercialización, como cadenas de frío y adecuados medios de transporte, además de la investigación de mercados.

Hay países que viven gran parte del año con gran parte de su superficie bajo hielo, como el Islandia, y con una población no muy numerosa pasible de ser suplida por la producción dominicana en muchos rubros, sin vecinos cercanos capaces de producir muchos de los productos para los cuales nosotros tenemos condiciones óptimas.

Cuando uno tiene la oportunidad de viajar a países desarrollados se sorprende al observar los precios que nuestras frutas muestran en supermercados y, sobre todo, en las fruterías selectas.

Suplir nichos selectos de esos mercados podría constituir un desarrollo interesante para nuestro sector agropecuario, pero, desde luego, además de cumplir con las exigentes

reglas fitosanitarias, se precisa determinar qué canales de comercialización habría que desarrollar, qué condiciones se requerirían en la cadena logística.

El importante tráfico aéreo que genera la actividad turística pudiera significar una ventaja competitiva en esa logística. En este campo, creo que la iniciativa del CNC de someter a estudio profundo las posibilidades de ampliar la penetración de los mercados externos de un conjunto de productos en los cuales parece que tenemos ventajas competitivas, puede resultar en un aporte importante, si se le da la continuidad necesaria. Los productos seleccionados fueron: aguacate, banano, cacao, coco, mango, piña, vegetales de invernadero, vegetales orientales, chinola y yuca.

Otro potencial se podría definir a partir del establecimiento de estrechas colaboraciones con la diáspora dominicana, que ha cobrado magnitudes importantes. Precisamente hace pocos días se desarrolló un encuentro para reflexionar sobre cómo esos migrantes podrían incorporarse al proceso de desarrollo nacional.

Y no se trata solo de los productos agropecuarios, sino de los agroindustriales. Es necesario estudiar las características de la oferta de los alimentos procesados en los mercados de destino. El diseño de envases, su tamaño, las especificaciones de su composición. Los consumidores de los países desarrollados se han vuelto muy exigentes en

cuanto a las propiedades de los alimentos y la comida saludable es una alta prioridad. Y eso debe tenerse en cuenta cuando se piensa en exportar.

Antes de terminar, nunca podrá exagerarse la importancia de preservar los recursos naturales. En el país se desperdicia mucha agua, con todas sus implicaciones, fiscales y medioambientales. El riego por goteo tiene que ser la alternativa a escoger. También hay que evitar el uso excesivo de agroquímicos tóxicos en algunas zonas, que envenenan el agua y la tierra.

El campo dominicano se ha venido quedando sin la generación de relevo. Hay que buscar la forma de volver a atraer al campo la gente joven, más abierta a la técnica, a la innovación, al concepto de negocio. Esto requerirá una eficiente operación de cada institución de apoyo y, muy importante, una eficiente coordinación interinstitucional.

Y creo que será necesario sortear las limitaciones que imponen los tratados multi y bilaterales para tales apoyos. Dado que no contamos con la fuerza para modificar tales tratados, habrá que buscar las vías para poder ofrecer a nuestros hombres del campo apoyos compensatorios a aquellos que están prohibidos.

A falta de un verdadero pacto fiscal que coloque en el centro de atención la provisión de bienes públicos, el gobierno hace lo que puede con lo poco que tiene. Mientras

tanto, el sector privado continuará siendo el gran protagonista.

Muchas gracias